

Independientes en política

SANTOS JULIÁ, EL PAÍS, 12/02/1995

Todo este largo periodo de gobierno socialista habrá servido, al menos, para replantear casi todos los problemas de las democracias de nuestro tiempo. Uno de ellos, y no el menor, es el del lugar de los independientes en la acción política institucional. Los socialistas, cuando caen en la cuenta de su aislamiento, invitan a prestigiosas personalidades a incorporarse al Parlamento o a entrar en el Gobierno. Casi siempre, como de nuevo pone en evidencia ese peñascazo lanzado por Pérez Mariño a las ya movidas aguas por las que discurre el pacto entre el PSOE y CiU, con mala fortuna final para los interesados y con desprestigio para los mismos socialistas.

Independiente se dice de aquél que, por haber adquirido cierta relevancia pública, es llamado por los dirigentes de un partido a participar en la actividad política institucional, aun sin pertenecer o, más exactamente, por no pertenecer a ningún partido. El independiente suele ser un intelectual que se ha ganado cierto prestigio por el desempeño de una cátedra, su actividad de publicista, su obra artística o, de manera abrumadora, la titularidad de un juzgado. No cualquiera puede aspirar a la condición de independiente; para serlo, es preciso haberse labrado lo que antes se decía un nombre.

Pero quien se labra un nombre en un arte o en una profesión difícilmente puede aceptar la exigencia de organización y disciplina sin la que es impensable la acción política. Es independiente porque está des/organizado y es in/disciplinado, porque todo lo que es lo debe a su trabajo o a su genio individual, no a una organización que le haya servido de estímulo o cobijo. Nada de extraño, pues, que cuando el independiente entra, siempre por arriba, en política quiera mantener su voz individual, libre de los vínculos que constituyen una organización partidaria. Un independiente pasará por todo, excepto por la renuncia a su

propia voz, a la voz sobre la que ha construido su propio personaje.

De ahí que la presencia de independientes en el Parlamento o en el Gobierno oculte una contradicción y acabe habitualmente en el "no es eso, no es eso" orteguiano. La contradicción radica en que ha saltado al Parlamento gracias a que un partido lo ha incluido en sus listas, pero una vez llegado, quiere hablar como si estuviera allí por su único y exclusivo mérito personal. Para un independiente, la única ética posible, la ética a la que debe su nombre, la del trabajo personal, de fidelidad a las exigencias de su profesión, es la ética de la convicción: dice lo que piensa, porque en decirlo le va, con el prestigio de su posición, su propio ser. No sería independiente si no actuara así, si por su boca hablara un partido.

Pero el filósofo que aspira a educar al príncipe, el intelectual ilustrado que pretende convertirse en consejero áulico del déspota han pasado a la historia. En democracia, la única práctica política posible es la conquista de mayorías; ya no hay otra forma de hacer política que ésa. Y construir una mayoría, sea en una comisión parlamentaria, sea en un partido político, sea ante los electores, requiere un trabajo de organización que un independiente no puede ejecutar sin renunciar previamente a su condición, es decir, sin crear profundos vínculos de dependencia con otros a los que se debe por la sencilla razón de que a ellos debe lo que políticamente es o puede llegar a ser. Ésa es la servidumbre de la política, ése es su precio. Quien no esté dispuesto a pagarlo, quien no esté dispuesto a conquistar trabajosamente para sus posiciones a la mayoría de su grupo, de su partido, o del electorado, y lo único que pretende es que su voz libre y soberana resuene en los ámbitos abiertos por otros para él, lo mejor que puede hacer es no entrar en la política institucional o, si se confundió, salir rápidamente de ella y cubrirse la cabeza de ceniza. Todo, menos irse de rositas de una aventura en la que se embarcó por su libérrima voluntad.

¿Qué fue de los renovadores?

SANTOS JULIÁ, EL PAÍS, 26/03/1995

Renovador, lo que se dice renovador, sólo se es una vez en la vida, cuando, todavía joven, se mata al padre para ocupar inmediatamente su lugar. Felipe González lo fue, hace 25 años, cuando se plantó ante Rodolfo Llopis en el XI Congreso del PSOE en el exilio y le discutió la dirección del partido en el interior. Dos años después, en el congreso de 1972, Llopis eludió presentarse ante quienes iban a ser sus matadores y nadie se arriesgó a ocupar el sillón vacío: una dirección colegiada, o sea, una dirección imposible, fue la fórmula a la que recurrieron quienes no se atrevieron a culminar el sacrificio ritual. Otros dos años más y, en 1974, los parricidas sacaron ya todas las consecuencias de aquella muerte ritual, fundadora del nuevo PSOE: despreciados por Llopis como jóvenes recién llegados al socialismo, fueron los únicos que osaron dar un paso al, frente y reclamar para ellos la parte del león de la herencia socialista.

Aquella renovación se había gestado en un bar del Parque de María Luisa, de Sevilla, una tarde en la que este grupo de recién llegados se sintió con fuerza suficiente para enviar un emisario al asalto de Toulouse. Tenían un líder; unas nociones de marxismo más bien vulgar, del tipo de que la teoría y la praxis deben relacionarse dialécticamente; un programa socialista-del-sur, que Guerra cocinaba con una pizca de socialismo francés, algo de comunismo italiano y "unas gotas de populismo castrista"; una estrategia de conquista de parcelas de libertad y una firme voluntad de hacerse con el partido. Lo consiguieron. En poco tiempo refundaron el PSOE desde una base completamente nueva: los veteranos, incluso los que les habían ayudado a conquistar la plaza, quedaron muy pronto marginados; los asturianos y vascos se conformaron con posiciones secundarias, y los madrileños, enzarzados en el laberinto de sus querellas internas, no dejaron más huella que el recurso a la pataleta.

Si los que, 20 años después, se llamaron renovadores hubieran aprendido la lección de aquellos jóvenes, seguramente no andarían ahora tan perplejos. Ser renovador es matar al padre para ocupar su lugar. Es ilusorio pretender que triunfe un programa renovador y confiar la dirección de la operación al jefe vitalicio. La renovación se emprende contra quienes ocupan el poder, no, nunca, desde la cima del poder. Para renovar no se puede pedir permiso a los que llevan decenas de años en los cargos ni aceptar compromisos con quienes están destinados al sacrificio. Renovar es romper con un pasado para marcar un nuevo punto de partida. Felipe González lo hizo una vez en su vida; no puede hacerlo dos veces: ¿contra quién, si no contra sí mismo, contra su propia historia, podría ser renovador?

Esa fue la radical limitación de la segunda hornada de renovadores: sin capacidad para crear una plataforma autónoma, con sus propios dirigentes, con un programa y una estrategia que les identificara y diferenciara, se pusieron en manos de papá, para que fuera él quien les sacara las castañas del fuego del guerrismo. Y ahora, como no se atrevieron, o tal vez no pudieron, renovar en su día, aparte de las luchas por unos puestos en las ejecutivas provinciales o regionales, lo que hacen es adoptar los modos y el lenguaje de aquéllos a quienes pretendían desplazar. Es verdaderamente penoso que personas intachables, gestores honestos, cabezas de primera fila como no faltan en el partido socialista no hayan tenido nada que decir acerca de la cadena de desventuras que desde hace un año sacude a su partido y a su gobierno. Cerrar filas, ofrecer un frente común, erigirse en apologetas de lo que no tiene posible defensa, denunciar la gran conspiración de la prensa y de los jueces malvados, ahogar cualquier voz discrepante: tal es la tarea prioritaria a la que se han entregado con fruición algunos destacados renovadores desde que se apagaron las luces del último congreso de su partido y comenzó el diluvio.

Más que unas municipales

SANTOS JULIÁ, EL PAÍS, 14/05/1995

El presidente de la comunidad de Madrid acaba de pedir a los electores que no sean esquizofrénicos y que, si desean fastidiar a Felipe González, esperen a que se presente como candidato en unas elecciones generales, no vaya a ser que por fastidiar al presidente del Gobierno se castiguen a sí mismos eligiendo alcaldes incapaces de limpiar de basura las ciudades. Las próximas elecciones son municipales y autonómicas y los ciudadanos deberían mostrar la capacidad de discriminación que se le supone a un electorado adulto: el día 28 no elige usted presidente de Gobierno, sino alcalde de su pueblo y presidente de su comunidad.

Con tan prudente recomendación, Joaquín Leguina olvida que los electores, porque así lo establece la Ley de Régimen Electoral, votan más a partidos que a personas y que lo que está en juego en las próximas elecciones no es exactamente el nombre del alcalde o del presidente de la comunidad, sino el partido que ostentará el poder en municipios y comunidades autónomas durante los próximos cuatro años. Leguina pasa por alto que en España se votan siempre listas cerradas y bloqueadas, propuestas a los electores por los organismos competentes de los partidos políticos. No hay ahora ocasión de debatir si es ésta la mejor fórmula para garantizar la representatividad del voto; las hay mejores y las hay peores. La cuestión no es ésta, sino que en cada elección -legislativa, autonómica, municipal- los votantes se pronuncian sobre partidos, no sobre personas, aunque, naturalmente, el nombre del candidato que encabeza la lista pueda reforzar o debilitar el atractivo electoral del partido.

Y, como elegimos partidos, la única conducta esquizofrénica consistiría en hacer abstracción, en las sucesivas votaciones a las que somos convocados, de la política desarrollada por un determinado partido desde los diferentes planos de poder para los

que en ocasiones lo hemos elegido. No es en absoluto irrelevante para la decisión de votar en unas elecciones municipales a un partido o a otro -o votar en blanco, o no votar- sopesar cuál ha sido la política de ese partido en cuestiones que afectan no sólo a la vida municipal o autonómica, sino a la nación y al Estado. Por ejemplo, indultar a un reincidente torturador o iniciar una campaña en defensa de los GAL puede ser más de lo que un votante del PSOE esté dispuesto a admitir: si un Gobierno socialista concede ese perdón o emprende esa cruzada, alguien que haya votado al PSOE en las últimas elecciones generales para que hiciera otras cosas no habrá perdido la razón, sino que la tendrá sobrada, si manifiesta su lejanía de esa política en la primera ocasión que le depare el calendario electoral. Mala suerte si esa primera ocasión afecta a los candidatos a alcaldes o presidentes de comunidad.

Ciertamente, no estamos en abril de 1931 y cualquier intento de interpretar estas elecciones en términos de plebiscito sobre el régimen carece de sentido: contra lo que ocurría entonces, la monarquía parlamentaria se sostiene hoy sobre un amplio consenso social y político al abrigo de cualquier elección. Tampoco puede entenderse, a pesar de que muchos así lo quisieran, como un plebiscito sobre el Gobierno, que mantendrá su legitimidad, aunque pierda apoyo popular, mientras disfrute de mayoría parlamentaria. Mucho menos que derrocar un régimen o derribar un Gobierno, pero algo más que elegir alcaldes y presidentes de comunidad, el resultado de estas elecciones será como el anuncio del inmediato destino que aguarda a los diferentes partidos si mantienen su actual trayectoria y liderazgo. En este sentido, las próximas elecciones municipales y autonómicas podrían tener el mismo alcance, aunque en dirección contraria, que el de las generales de 1993. Entonces, González reafirmó su posición en el PSOE y Aznar sintió temblar la suya en el PP; ahora, Aznar podría salir reforzado y González camino del retiro. Aunque nadie vote a ninguno de los dos.

Unos electores muy sagaces

SANTOS JULIÁ 04/06/1995

Tan zarandeados por la clase política, con sus intentos de meterle miedo en el cuerpo; tan despreciados por los espíritus exquisitos, que les amonestan sobre la falsedad de esta democracia y la inutilidad del voto, lo cierto es que aquí los que responden de la forma más adecuada a las cambiantes circunstancias y crisis políticas son los electores. Ya lo hicieron en 1977, cuando era imprescindible que fuerzas políticas procedentes del franquismo se entendieran con las que habían luchado en la oposición, y repartieron sus votos de forma simétrica en un resultado que era como un mandato para que todos los partidos negociaran y pactaran la futura Constitución. Y lo volvieron a hacer en 1982, cuando millones de electores, permaneciendo fieles a sus opciones políticas básicas, no dudaron en cambiar su voto con objeto de responder a la crisis política abierta por los intentos de golpe de Estado y agravada por el desmoronamiento de UCD y la quiebra del PCE.

Con su voto universal al PSOE, los electores otorgaron poder y autoridad al único partido con recursos para estabilizar en aquellos momentos la democracia. UCD, que nunca llegó a ser un partido, desapareció rápidamente de la escena política, dejando un hueco que la derecha, muy lastrada aún por sus orígenes franquistas, se había mostrado incapaz de ocupar. Los electores han esperado pacientemente a que esa derecha se sacudiera el pelo de la dehesa y la han obligado a desplazarse hacia el centro antes de concederle una participación sustancial en el poder. Se han tomado su tiempo, porque la travesía ha sido premiosa, plagada de errores y de pasos en falso. En un primer momento, hace dos años, dejaron las espadas en alto, con la clara advertencia al PP de que no consideraba aún que su viaje al centro pudiera darse por terminado y con un evidente mensaje al PSOE para que respondiera de las tropelías cometidas durante su dorada

década en el poder. Y el domingo pasado, como el PSOE, a pesar de las vacías declaraciones de sus dirigentes en el sentido de que habían entendido el mensaje de 1993, ha dado muestras inequívocas de no haber comprendido nada, el electorado ha reaccionado haciendo subir al PP un peldaño más en su lenta progresión hacia el Gobierno.

Pero, escaldados por aquel mandato universal de 1982, los electores se han mostrado ahora más cautos y han evitado sagazmente desarbolar al PSOE y otorgar un arrollador triunfo al PP. El resultado es, pues, el mejor que un demócrata podría desear: una derecha que reúne los apoyos suficientes para, si no se extravía en el ejercicio del poder municipal y autonómico, llegar al Gobierno en breve plazo; y una izquierda que no queda en absoluto arrasada y que mantiene una base suficiente para, si acierta en la renovación de sus valores y sus dirigentes, no perder las posibilidades de retornar al poder local. Con ese resultado, los electores consolidan una vez más la democracia, pues tan perjudicial habría sido que el PSOE no hubiera salido derrotado de estas elecciones como que el PP hubiera cosechado un triunfo al modo de 1982.

Y así, es de nuevo el electorado el que marca el camino, con una lección ejemplar a tanto político fatuo y a tanto espíritu exquisito. Ni abril de 1931, ni vuelta al 18 de julio y a la guerra civil, ni descenso de España a los infiernos: los electores han hecho caso omiso de quienes aventuraban una gran catástrofe moral y política si el PSOE no era expulsado violentamente del Gobierno, pero han recordado a los demagogos de la izquierda que su cuento de miedo "¡que viene la derecha!" no les afecta. Si, en lugar de despreciar su inteligencia y su capacidad de discernir sus propios intereses, los políticos profesionales y los que hacen política desde los medios de comunicación aprendieran de los electores, quizá nos iría a todos mejor en el tiempo que queda hasta que se produzca, sin romper las reglas de juego y si las urnas así lo deciden, la alternancia en el poder.